

El camino abierto*

Angélica Cuéllar Vázquez

La movilización social suscitada por la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la república, antes y después del 6 de julio, es un fenómeno no visto en varias décadas.

En efecto, el apoyo a la *corriente democrática* (desprendimiento del PRI y primera agrupación en postular a Cárdenas) provino de partidos tradicionales como el PARM y el PPS, de izquierda como el PMS y de un gran número de organizaciones sociales independientes. Se abrió así un espacio plural y competitivo, diferente al que en los anteriores procesos electorales federales había ocupado a sus anchas el partido oficial.

En pocos meses (en especial a partir de febrero de 1988, con los sucesos que ocurrieron en La Laguna) el fenómeno cardenista se implantó en diversas áreas de la sociedad, de rangos sociales, políticos e ideológicos tan distintos, que sorprendió al México actual.

Lo primero que resalta de dicho proceso es la voluntad política unitaria, tanto de los partidos políticos como de las demás agrupaciones sociales. Adhesiones, declinaciones y acuerdos varios hicieron posible la postulación de un candidato de oposición que aglutinó a buena parte de la izquierda, a la disidencia priista, a organizaciones populares y a cientos de miles de ciudadanos sin militancia ni partido.

Frente a estos sucesos cabe preguntarse: ¿qué circunstancias se conjugaron para abrir este espacio político?, ¿por qué resquicios de la sociedad surgieron anhelos democratizadores, con voluntades políticas unitarias, que enfrentan al régimen con tales dimensiones?

A fin de aproximar una respuesta o, mejor dicho, para avanzar en algunas propuestas de análisis futuros, partiré de una perspectiva que me es propia: recorreré un camino andado, tratando de buscar, con la ayuda de otros actores y protagonistas, parte del misterio.

La historia reciente del país puede aportar, sin duda, elementos de reflexión para dicho análisis. En esta línea de pensamiento, es necesario recordar que el gobierno de Luis Echeverría representó el último intento desde el poder, de llevar a cabo un ajuste de cuentas con el pasado inmediato y recuperar el nacionalismo revolucionario como el eje político de dicho ajuste.

El proyecto reformador de Luis Echeverría tuvo dos vertientes fundamentales. Una, la *apertura democrática*, que buscó renovar las bases sociales de sustentación del gobierno, fortalecer su respaldo popular y superar la crisis de 1968, al abrir espacios de participación institucional a la izquierda. Otra, la estrategia económica del *desarrollo compartido*, con el fundamento de que no era necesario crecer antes para luego repartir: era imperioso equilibrar ambos procesos para elevar los niveles de bienestar de la población. En el terreno sindical, la política echeverrista inicial buscó sustituir a las viejas burocracias y renovar los ámbitos corporativos.¹

En este contexto y debido a algunas acciones del presidente Echeverría (liberación de los presos políticos, sus altercados con el máximo dirigente cetemista, por renovar a las burocracias sindicales, así como diversas declaraciones políticas democratizantes), surgieron en el país movilizaciones populares en tres planos principales: el obrero, el campesino y el guerrillero (tanto urbano como rural).

* Una primera versión de este texto fue discutida con Víctor Manuel Durand y con los colegas de la FCPyS que recién iniciamos reuniones para analizar la coyuntura actual. Ellos son: Guillermo Cárdenas, Fernando Castañeda, César Delgado, Gabriel Sánchez y Esperanza Tuñón, quienes aportaron sugerencias, críticas agudas y el entusiasmo que me impulsó a reescribirlo.

¹ Cuéllar Vázquez, Angélica, *Una rebelión dependiente. La Tendencia Democrática frente al Estado mexicano*, México, Ed. Terranova 1986, pp. 20 y siguientes.

Los años setenta, se convirtieron así en el escenario de la insurgencia obrera, la cual levantó banderas de democracia sindical; del movimiento campesino que se lanzó a ocupar tierras; y de la guerrilla, en especial la rural, que hizo de la montaña guerrerense su cuartel general. Dirigentes, organizaciones, programas y proyectos florecieron en esos años. Una gama de ideologías, desde mensuradas hasta radicales, intentaron promover cambios, reformas y revoluciones.

De manera semejante al presidente Echeverría, Rafael Galván, animador de la *tendencia democrática* de electricistas, acuñó en esos años un programa, el cual retomó el nacionalismo revolucionario como columna vertebral de las reformas que promovía. Galván y su corriente sostienen que el Estado mexicano había abandonado su origen popular una vez concluida la administración del general Lázaro Cárdenas: el viraje hacia la derecha, de sucesivos gobiernos entregados al imperialismo, habían convertido a las instituciones revolucionarias en parodias grotescas.²

El camino planteado por Galván y la *tendencia democrática* consistía en recuperar las instituciones, sobre todo las sindicales, de manos de los enemigos imperialistas y fortalecer a un Estado nacionalista y popular. Bajo esta óptica, la relación Estado-sociedad debía fundarse en adelante en los principios del nacionalismo revolucionario, consagrados en la Constitución de 1917.

Sin embargo, ni el proyecto gubernamental ni las reformas propuestas por Galván orientaron el devenir del país. El gobierno de Luis Echeverría enfrentó distintos polos de oposición que lo obligaron a cerrar el espacio de la *apertura democrática* y a modificar sus propuestas sobre las políticas sindical y económica.

En efecto, el empresariado criticó palmo a palmo la política gubernamental, obstaculizó sus acciones, creó organismos políticos propios* y, al final del sexenio, orquestó una fuga masiva de capitales para despedirlo con una estrepitosa devaluación del peso. El movimiento campesino rebasó desde sus primeras acciones los intentos oficiales por darle un cauce institucional a sus demandas. La guerrilla no se detuvo a considerar siquiera la propuesta echeverrista como una forma de conquistar espacios de poder. Radicalizó sus acciones y fue aniquilada en un baño de sangre. La insurgencia obrera no logró articular alrededor de alguna de sus diversas y diferenciadas corrientes una actividad unitaria, un programa global.

Las acciones en estos tres últimos planos quedaron limitadas a niveles muy variados de influencia, sin que llegaran a consolidar organizaciones políticas de relevancia ni a trascender sus ámbitos operativos. No fueron, pues, movimientos sociales capaces de convertirse en alternativa política y de aglutinar el descontento que crecía día con día.

Los proyectos de nación, de sociedad, de Estado, cuando los hubo, se vieron acotados por espacios gremiales o políticos muy circunscritos y fueron afectados por el revés sufrido por el reformismo echeverrista.

En octubre de 1972, en la VII Asamblea General Ordinaria del PRI (entonces presidido por Jesús Reyes Heróles), el gobierno volvió a cerrar filas con sus organizaciones corporativas, las cuales habían adoptado ya algunas de las banderas de la insurgencia obrera, y bloqueó el espacio político para la movilización popular. De este modo, el nacionalismo revolucionario quedó impreso en los acuerdos de la VII Asamblea, aprisionado en el pacto corporativo.³

El nacionalismo revolucionario, como expresión política de cambio desde el poder y como elemento dinamizador de la lucha de un sector de la insurgencia obrera, quedó congelado en esa década de intensa movilización social.

Tras la contención de la movilización popular, del asedio de una patronal ahora agrupada en el Consejo Coordinador Empresarial y resuelta a hacer política, el sexenio de Luis Echeverría desembocó en los célebres acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pactos que cancelaron en los hechos el ámbito de las negociaciones salariales. Así y todo, el terreno quedó arado para que el gobierno abriera, a futuro, canales de participación política institucional a los partidos de izquierda.

Animado por el *boom* petrolero, el gobierno de José López Portillo combinó la retórica populista con una política de austeridad encaminada a lograr el equilibrio económico: garantizó una reforma política que institucionalizó la vida partidaria de la oposición y ciñó su política económica a los acuerdos firmados con el FMI.

La administración de Miguel de la Madrid censuró las formas populistas de sus antecesores y optó por asumir políticas "realistas", a partir de diagnósticos fríos y exactos, buscando equilibrar todo lo desequilibrado: los déficits internos y externos, las tasas de inflación, los salarios, la relación oferta-demanda de empleo y el creciente desempleo, el recorte (en aras del realismo eco-

² *Ibid.*, pp. 137 y siguientes.

* En 1975 la patronal instituyó el Consejo Coordinador Empresarial.

³ *Ibid.*, pp. 62 y siguientes.

nómico) de los subsidios a los productos básicos y a los servicios públicos, y otros.

Apoyado en las organizaciones corporativas, ahora más sumisas que nunca, el gobierno actual construyó el mito de la modernidad tecnocrática. La nación fue exhibida como un ente desclasadado al cual había que salvar. La sabiduría tecnocrática permitiría alcanzar la estabilidad económica y la madurez política.

El populismo apareció como el padre de todos nuestros rezagos y atrasos, como el enemigo a vencer: se imponía la racionalidad económica y política y se agrietaban cada vez más las bases consensuales del régimen. Sus soportes corporativos se observaron entonces claramente sometidos a la voluntad gubernamental, carentes ya de capacidad alguna para influir en la toma de decisiones. Las cuotas de poder (diputaciones, senadurías) se asignaron sin que mediara una influencia efectiva de las cúpulas burocráticas de las organizaciones corporativas, para no hablar del terreno de la política económica. Como es bien sabido, el propio Fidel Velázquez llegó a ajustarse de la falta de consulta por parte del gobierno.

En suma, los esfuerzos desmovilizadores de los dos últimos gobiernos contrastan con el inicio del gobierno de Luis Echeverría, que al menos dio cabida a uno de los proyectos de renovación sindical más importantes de los últimos años.

La década de los ochenta fue la de las *coordinadoras*. Estas buscaron nuclear a distintas fuerzas populares y, si bien registraron ciertos avances en el campo organizativo, no lograron modificar un ápice el curso de la política gubernamental.

El gobierno de Miguel de la Madrid no solo abandonó y criticó las formas populistas, sino que ignoró del todo una vieja tradición del sistema: hacer política con cierto grado de consulta y satisfacción de los intereses populares. Entonces, la política se fue convirtiendo en la mera enumeración de los problemas nacionales y en su contraparte: la imposición de las medidas que el gobierno consideraba necesarias para superarlos. Se minimizó el peso político de los aparatos corporativos, pero el intento por recuperar al ciudadano en la lógica racional del gobierno, no rindió los frutos esperados.* Desplazados e igualados en el discurso, los ciudadanos, hombres y mujeres de carne y hueso, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, sectores medios, desempleados, etcétera, obtuvieron y continúan recibiendo de la modernidad y de la madurez política, ingresos insuficientes, violencia cotidiana, cancelación de pers-

pectivas políticas y cuotas cada vez mayores de autoritarismo.

El sometimiento de la política económica a los compromisos, contraídos con los acreedores internacionales con el propósito de conseguir nuevos préstamos o, bien, de renegociar la exorbitante deuda externa; los intentos por recuperar la confianza del gran capital (verbigracia, devolviéndole la banca nacionalizada, rematando las empresas paraestatales), fueron y son la pauta de una separación cada vez mayor del gobierno con un compromiso popular y una política consultada.

Este divorcio forma parte, sin duda, de la fuerza que ha adquirido el fenómeno político encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Pero, veámos esto con mayor detalle. Si frente a la sorpresa motivada por los acontecimientos recientes dijéramos que estamos ante el despertar de un México dormido, supondríamos que las movilizaciones populares de los últimos veinte años no fueron significativas o, bien, carecieron de consecuencias importantes. En cambio, si afirmáramos que nos encontramos de cara a un movimiento que toma parte de su fuerza del reencuentro con una historia y una tradición política, no faltaríamos a la verdad. Aún así, nos acercáramos peligrosamente a una explicación tautológica. ¿En qué reside entonces lo novedoso del fenómeno actual?; ¿cómo y por qué influye en este movimiento una gama tan amplia de corrientes políticas y grupos sociales?

De lo hasta aquí expuesto, se desprenden ciertas conclusiones. Ni la protesta y movilización sindical o popular (oficial o independiente), ni la inconformidad y la denuncia constante de los partidos políticos de izquierda o de derecha bastaron para obligar a los dos últimos gobiernos a ejercer una política consultada. Al mismo tiempo tampoco fueron capaces de ofrecer un proyecto alternativo que articulara las demandas de la sociedad en su conjunto. Ciertamente, las movilizaciones encaminadas a modificar la política económica o, bien, a ampliar los espacios democráticos, se circunscribieron a los ámbitos gremiales o partidarios. Por el contrario, la movilización actual ha trascendido dichos espacios. En este punto creo que cabe reflexionar sobre el origen del movimiento.

La *corriente democrática*, en cuanto desprendimiento del Partido Revolucionario Institucional, representa un cuestionamiento desde las entrañas del poder a las formas del ejercicio político. Por tratarse de un desgajamiento, la *corriente* nació como un proyecto político integral y no quedó sujeta a los avatares de un plan presidencial, lo cual fue el caso de la tendencia democrática de los electricistas. La *corriente democrática* encarna, así, un antagonismo político presente, que,

* Recuérdense las iniciativas enviadas al Congreso de la Unión para modificar la Constitución, por ejemplo, el derecho a la salud y a la vivienda.

además, recupera la tradición del nacionalismo revolucionario en su más estricto apego a la Constitución de 1917. Veámos:

...Nuestra propuesta es muy clara: Luchamos por retomar el camino abandonado y negado de la Revolución Mexicana, cuyos principios y objetivos, sostenemos, mantienen su vigencia: la efectividad del sufragio con la que Madero se lanzara a la lucha en 1910; la emancipación económica, condición de autonomía política y de ejercicio pleno de la soberanía nacional; la erradicación de la miseria, la ignorancia, la injusticia y la explotación; una equitativa distribución de la riqueza; una posición de la igualdad en el concierto de las naciones.⁴

Lo anterior reviste una enorme importancia, pues al mismo tiempo que vacía al PRI de los símbolos y los valores de la revolución de 1910-1917, los revierte en su contra, al acusarlo del incumplimiento de buena parte de los ideales revolucionarios plasmados en la Carta Magna. Se abrió así un espacio político de enormes dimensiones: la *corriente democrática* recupero históricas reivindicaciones populares, justo en el momento en el que el pacto social sufría severas fisuras.

No se trata, al menos hasta el momento, de un simple y llano retorno al pasado. Si bien es cierto que el fenómeno cardenista condensa la protesta por el abandono oficial de una tradición política, y recupera el pacto constitucional al reclamar el cumplimiento de la Carta Magna y sostener los ideales revolucionarios como formas de consenso, no es menos cierto que éste ha enriquecido y renovado el contenido de dicho pacto social con la incorporación de nuevos movimientos sociales, de fuerzas emergentes y frescas. Así, al rescatar la tradición política popular el cardenismo ha desdibujado y cuestionado el mito de la modernidad tecnocrática y la estrecha racionalidad económica. De este modo, al aglutinar movimientos sociales nuevos se ha establecido como un contrapeso social al oficialismo y como una auténtica opción democrática.

Los nuevos actores y sujetos sociales que participan activamente en el movimiento cardenista representan un amplio espectro de la sociedad y de la política mexicanas. Ecologistas, feministas, minorías sexuales, escolares, universitarios, intelectuales y otros, convergen con movimientos urbanos de los colonos, de los barrios, de las capas



⁴ Discurso pronunciado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el zócalo capitalino, el 25 de julio de 1988, *La Jornada*, junio 26 de 1988.

medias y, lo que es sumamente importante, de los ciudadanos que hasta ahora no habían encontrado el lugar adecuado para expresar su descontento ante el autoritarismo gubernamental.

En la propuesta cardenista aparece, pues, una relación Estado-sociedad que no se funda ni en el corporativismo ni en la omnipotente figura presidencial:

La relación del Estado con los cuerpos sociales no puede seguir siendo corporativa. La claudicación de dirigentes, desde hace décadas, su entrega y sumisión al gobierno para mediatizar las demandas de las bases, a cambio de manos libres, solo sirve ya para profundizar la corrupción y ha dejado de ser útil incluso a un gobierno contrario a los intereses populares...⁵

Se propone, entonces, otra forma de relación, en la cual las agrupaciones sociales conserven su independencia frente al Estado y los partidos políticos y constituyan un contrapeso social al poder público. Además, se sostiene la necesidad de democratizar la vida interna de las propias agrupaciones sociales:

La democracia reclama espacios en las organizaciones sociales (...) Las cúpulas han impuesto a su arbitrio una obligada afiliación partidaria, que una vez más ha demostrado su ineficacia: obreros y campesinos sufragaron por la democracia, para comprometer los partidos y fuerzas políticas a los que dieron su confianza, a modificar esa legislación, a romper dependencias, a dar fin a la corrupción corporativa...⁶

El contrapeso social, como esbozo de una forma diferente del ejercicio político, se enfrenta a una figura presidencial omnipotente, que también es cuestionada. En este punto aparecen las imágenes de nación y de soberanía íntimamente ligadas a una vida social y política más democrática. En la propuesta cardenista se busca conciliar lo que en la práctica política ha sido irreconciliable: una nación fuerte y soberana con una vida democrática. Hasta ahora, la nación fuerte y soberana se ha asociado con un Estado corporativo fuerte y con una figura presidencial igualmente fuerte, que han limitado y escamoteado las formas autónomas de organización social y los contrapesos al poder. Como es claro, plantear lo anterior no basta para superar los fenómenos

apuntados pero da cuenta de la importancia que la autonomía y la democracia cobran en la propuesta cardenista:

Llegar a la democracia política, económica y social, demandará reformar leyes, como el código electoral, limitar en la práctica las facultades del Presidente de la República, que la decisión unipersonal no endeude y comprometa al futuro del país, que no ejerza más funciones extraconstitucionales que han vulnerado la vida partidaria y han permitido el reparto gracioso de prebendas y privilegios a costa de los intereses nacionales...⁷

El cardenismo actual se ha fortalecido como un proyecto político que ofrece una opción para allanar los caminos hacia la democracia, como un contrapeso que permite crear nuevas reglas del ejercicio político. Estas propuestas, unidas a los valores y símbolos de la Revolución de 1910-1917, de hacer efectiva la Constitución General de la República y otras, han hecho posible la unidad de agrupamientos de lo más diverso. A obreros y campesinos se han agregado nuevos actores para quienes ni la expropiación petrolera, ni el reparto agrario o el corporativismo forman parte de su identidad o de sus anhelos políticos o ciudadanos.

El fenómeno cardenista se ha fraguado como una alternativa democrática y antiautoritaria, como un espacio de construcción y convergencia. Sea cual fuere su devenir en el corto y en el mediano plazo en el plano organizativo, habrá que estar atentos a la preservación de la autonomía de las organizaciones y de los movimientos sociales que lo han consolidado. En efecto, haber logrado unificar a buena parte de la izquierda a movimientos de lo más disímil, no supone necesariamente la pérdida de la autonomía de las organizaciones convergentes. Este reto (mucho mayor que el de consolidarse como partido político, o el de definir sus acciones como frente) deberá enfrentarlo el cardenismo ahora y cuando sea gobierno.

Quedan, obviamente múltiples interrogantes, muchas vetas para los sociólogos y políticos. Pretender encuadrar el movimiento en sus líneas y planteamientos generales, buscar las respuestas a su ascenso en medio de la crisis del pacto social, no respondería cabalmente a la integración de la diversidad del proceso, ni explicaría la rebelión silenciosa del 6 de julio, ni el crecimiento del cardenismo en un México tradicional y moderno, autoritario y democrático, indígena y mestizo, sometido y rebelde, a la vez.

⁵ Discurso pronunciado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el zócalo capitalino, el 16 de julio, *La Jornada*, julio 17, 1988.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*